su parte, Naga cuenta con tres órganos asesores presididos por el alcalde. Consejo de Coordinación de Desastres, Grupo de Voluntarios de Rescate y Consejo de Mitigación de Desastres, este último con el objeto de desarrollar el Proyecto Urbano de Mitigación de Desastres, con participación de agencias del Gobierno y de la sociedad civil.

Participación de actores no gubernamentales. Las organizaciones ciudadanas forman parte de los Consejos de Coordinación. Además, en la mayoría de municipios existen grupos de voluntarios de rescate. En Negros existen la Federación de Rescate y la Academia de Seguridad Pública. Por su lado, en Naga, en los órganos y comisiones asesoras ya mencionados, participan diferentes organizaciones ciudadanas, privadas y ONG

8 Análisis de fortalezas y debilidades de las organizaciones locales

8.1 En relación con los contextos nacionales

El propósito del Diálogo Regional de Política es el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y gobiernos locales para el manejo integral de riesgos.

En relación con ello y tal como se sintetiza en el Anexo No 1, uno de los aspectos esenciales a destacar es que el nivel de descentralización en lo político, administrativo y financiero para todas las actividades del desarrollo, es determinante para la autoresponsabilización de los gobiernos locales para la reducción de riesgos. Suiza es altamente representativa de los países con larga tradición de autonomía local y, por ende, de manejo de los riesgos. Por su parte, en Colombia y Filipinas, así como en Nicaragua y Bolivia, los procesos de descentralización de cada uno en las dos últimas décadas, han sido esenciales para elevar las facultades y el poder local en el manejo de riesgos. Por el contrario, Guatemala, representativa del centralismo de muchos países de América Latina y el Caribe, con políticas de descentralización muy recientes e incipientes, presenta un nivel mínimo de manejo local del desarrollo, de los recursos y, por tanto, del manejo local de los riesgos. Un aspecto favorable en América Latina es la tendencia, aunque lenta, hacia la desconcentración y la descentralización.

Ello permitiría que en el futuro, dentro del contexto político y constitucional de cada país, las localidades cuenten con mayor autonomía o descentralización política, administrativa y financiera para disponer de facultades, instrumentos, recursos y autoresponsabilidad que les permitan actuar con mayor eficacia sobre las actividades de desarrollo local sujetas o generadoras de riesgo. Pero no puede desconocerse que aún en los países con mayor autonomía, como Suiza, rige el concepto de

subsidiariedad, para que, cuando los problemas rebasen las capacidades locales, los niveles superiores del Estado asuman la responsabilidad de acudir en su apoyo, con los recursos humanos, técnicos y financieros a su disposición

8.2 En relación con los marcos de política

En los cuatro países estudiados y en otros del continente sobre los que se tiene información, el grado de éxito en el manejo local de riesgos se funda igualmente en el avance en las políticas, estrategias y normas legales para la reducción de riesgos en el nivel nacional de cada uno. Suiza muestra la más larga tradición de manejo local de riesgos, apoyado en políticas nacionales y locales muy antiguas. Por su parte, en Colombia y Filipinas, Nicaragua y Bolivia el manejo de riesgos en las localidades se inició claramente a partir de la definición de esas políticas nacionales, que les asignaron responsabilidades explícitas en la materia. Los logros alcanzados en parte de los municipios grandes y medianos de Colombia, como en los casos de Bogotá y Manizales aquí analizados, se han derivado en gran medida de las políticas nacionales establecidas hace quince años. De otra parte, el inicio de actividades en Guatemala está asociado a políticas recientes sobre la materia en el país.

Dicho marco nacional de políticas constituye la condición fundamental para que los gobiernos locales hayan o no alcanzado éxito en la introducción del tema de los riesgos en aspectos esenciales como la planificación de su desarrollo, el ordenamiento y uso del territorio, el control ambiental, la urbanización y las construcciones, con concepto preventivo. Los anteriores aspectos han sido considerados en los cuatro casos, además de Bolivia y Nicaragua, como instrumentos claves para un eficaz manejo local de los riesgos. Colombia es el caso más claro en el que, a partir de la creación del Sistema Nacional, muchos municipios, departamentos y entidades nacionales comenzaron a trabajar en los aspectos enunciados, como parte central del manejo local de riesgos.

Otro determinante del éxito en el manejo local de riesgos es el nivel de definición y distribución de las responsabilidades políticas, administrativas y financieras en la materia., tanto para las administraciones locales, como para las entidades sectoriales, el sector privado y el comunitario, en lo relativo a la generación y a la reducción de riesgos. Con excepción de Guatemala, las leyes de los otros países estudiados y las de Bolivia y Nicaragua, asignan responsabilidades a los diferentes actores involucrados. En Colombia es claro que la responsabilidad de las autoridades locales en el tema se inició a raíz de la creación del Sistema Nacional.

En todos los casos es evidente la menor capacidad general de los municipios pequeños. Pero en los países en los que las localidades reciben mayor apoyo subsidiario de los niveles superiores en recursos

humanos, científico-técnicos y financieros, estas tienen mayor posibilidad de desarrollar el manejo local de riesgos. En el caso colombiano, los municipios no reciben recursos específicos del Gobierno Nacional para realizar sus actividades de reducción de riesgos. La política del Sistema es que cada municipio asigne en su presupuesto al tema de los riesgos la prioridad que amerite frente a los demás sectores. Pero existe claridad en cuanto a que ningún municipio puede solucionar sus riesgos exclusivamente con sus propios recursos. No obstante, el punto de partida es que el municipio asuma la responsabilidad de la gestión para reducir sus riesgos.

Debe aceptarse, como lo menciona Freeman en sus estudios, que en general ni los gobiernos nacionales ni los locales, y tampoco el sector privado han asumido en América Latina en forma expresa y amplia sus responsabilidades sobre el tema de los riesgos en todas sus actividades. De igual manera, que tampoco han incorporado formalmente el tema en los procesos de planificación y presupuestarios. Suiza tiene políticas claras en ese campo. Colombia y en menor grado Filipinas, están avanzando, aunque tímidamente, en ese sentido con el desarrollo de sus Sistemas Nacionales.

En todos los países estudiados y en otros de América Latina se percibe un ambiente propicio hacia los sistemas nacionales formales para el manejo integral de riesgos desde el nivel local, pero el grado de poder local en esta materia lo definirá el nivel general de descentralización en cada país. En otros países, discrepancias sobre la entidad líder del sistema han paralizado estas iniciativas.

Con excepción de Suiza, en los demás países estudiados y en general, de América Latina se sigue otorgando prioridad a los preparativos frente a la mitigación de riesgos, exceptuando los dos municipios analizados en Colombia, pero sin desconocer que en este último la situación general de los demás municipios no es igual a la de Bogotá y Manizales, ya que el Sistema Nacional presenta debilidades de diversa índole.

8.3 En relación con los marcos legales

Existe claridad respecto a que las leyes que rigen en los países para las organizaciones especializadas en el manejo de emergencias o para la protección civil no conllevan instrumentos suficientes para que las administraciones locales manejen los riesgos en forma integral. Por ello, los países estudiados, con grados de descentralización muy diversos, disponen o están buscando leyes con concepto de reducción de riesgos en la planificación del desarrollo, el ordenamiento y uso del territorio, control del ambiente, urbanismo y construcciones, que establezcan responsabilidades locales y sectoriales, públicas y privadas en estos campos.

En los países con mayor descentralización, las autoridades locales tienen facultad para expedir sus normas, siempre en el marco de las leyes nacionales. El caso más claro es el de Suiza; así mismo, los municipios colombianos visitados han aprobado normas con concepto preventivo sobre ordenamiento y uso de territorio, ambiente y códigos de construcción.

Otro aspecto trascendental es que, en general, los países en desarrollo no establecen responsabilidades para quienes generan riesgos, sean actores públicos, privados o ciudadanos. Mientras no exista legislación al respecto, los riesgos seguirán invariablemente aumentando y la inversión para su reducción será cada vez más inalcanzable para los Estados. Entre los países latinoamericanos analizados, sólo Colombia, Nicaragua y Bolivia tienen este tipo de norma.

8.4 En relación con la distribución de funciones entre actores involucrados

De la investigación se desprende que se logra mayor éxito en el manejo local de riesgos en los países en los que el concepto básico sobre distribución de responsabilidades radica en que cada entidad pública o privada y la ciudadanía, cada una en su campo de competencia, ya sea con sus propios recursos o con los que gestione ante las diferentes fuentes nacionales o internacionales de financiamiento, o acudiendo a la transferencia de riesgos, sea responsable de los riesgos que genere y sobre su prevención, mitigación, preparativos, y respuesta en todas las actividades que desarrolle. En Suiza, como en general en los países desarrollados, el principio de autoresponsabilidad es claro; en Colombia ya son frecuentes las demandas judiciales a autoridades públicas y empresas privadas por incumplimiento de sus responsabilidades legales.

Para el éxito en el manejo local de riesgos es imperativo que las responsabilidades de ejecución recaigan recaigan sobre los gobiernos y no en los comités de emergencias, como ocurre en muchos países latinoamericanos, pues conduce a que se diluyan las responsabilidades. Con excepción de Guatemala, en los otros tres países y en Bolivia y Nicaragua así está establecido.

Entre los municipios visitados en el continente, los colombianos muestran la más amplia distribución de funciones entre entidades locales. Una alta responsabilidad recae en las oficinas municipales para el manejo de riesgos, pero también se asignan competencias a oficinas como las de planificación, ambiente, salud, educación, obras públicas, comunicaciones, científico-técnicas y servicios públicos. En Guatemala y en menor grado en Colombia, existen debilidades en el manejo local de riesgos, como son las dificultades para la coordinación interinstitucional, el bajo apoyo técnico y el deficiente flujo de información para mejorar el conocimiento de los riesgos, desde el nivel nacional hacia las administraciones municipales, en especial hacia las pequeñas. En general, los gobiernos no conceden

importancia a la medición de los riesgos para incorporarlos en sus decisiones sobre planificación del desarrollo y, cuando lo hacen, es por lo regular en forma inadecuada.

Un grave problema en los países latinoamericanos es que, por el alto nivel de riesgo que ya existe, sin bases legales para responsabilizar a quienes lo produjeron, no se han definido los riesgos que deben asumir el nivel nacional, el local y el privado. Así, por factores políticos, sin conciencia sobre las implicaciones futuras, los gobiernos nacionales han asumido, sobre todo en la reconstrucción, responsabilidades ilimitadas e indiscriminadas.

Con excepción de Suiza, en los países estudiados no existen políticas gubernamentales de transferencia de riesgos, lo cual se refleja en que sólo algunas localidades tienen programas en este campo. Los fondos de emergencia que tienen todos los países y algunas localidades de Latinoamérica y Filipinas, cumplen sólo un papel parcial frente a las emergencias. Los casos de las localidades de Filipinas y Bogotá son la excepción.

8.5 En relación con las estructuras institucionales

A excepción de Guatemala, los otros tres países operan bajo el concepto de sistema nacional descentralizado en lo local y enmarcados en la estructura existente del Estado, no en forma paralela, pero con distintos grados de organización. En América Latina varios países tienden a crear este tipo de sistema y, además de Colombia, ya lo han constituido de manera formal Nicaragua y Bolivia. En los cuatro países estudiados hay comités de coordinación interinstitucional en todos los niveles del Estado y en todos los casos se reconoce su conveniencia para optimizar y coordinar el uso de recursos de todos los actores involucrados. La diferencia básica radica en que a nivel local unos operan en forma coyuntural solamente para casos de emergencia.

En América Latina, Colombia cuenta con el “sistema nacional integral más antiguo y desarrollado” (Freeman, Fase II). Vale la pena mencionar que allí, además de la Oficina para la coordinación nacional, se dispone de oficinas permanentes para manejo de riesgos en varias entidades nacionales, en la mayoría de departamentos y municipios medianos y grandes y en algunos pequeños y a ello se le atribuye en gran medida la sostenibilidad del Sistema Nacional; en general, en los tres niveles existen comisiones asesoras por temas especializados. Se constató que este tipo de estructura existe en los dos municipios colombianos visitados y, de manera similar, en las dos Provincias de Filipinas.

8.6 En relación con la participación de actores no gubernamentales

Por norma en los países analizados, las organizaciones no gubernamentales deben participar en los diferentes niveles de la estructura para el manejo de riesgos. Dicha participación está bastante institucionalizada en Suiza y Filipinas y parcialmente en Colombia, pero no en Guatemala. En los dos municipios visitados en Colombia, sectores profesionales y universitarios participan en las comisiones asesoras de los gobiernos y para la respuesta a emergencias las comunidades están integradas al aparato estatal a través de voluntariados de Defensa Civil y Cruz Roja. En Guatemala existen organizaciones comunitarias para la alerta y la respuesta, pero en parte desarticuladas de los gobiernos locales

La transferencia de riesgos, es altísima en Suiza, baja en Colombia, con excepción de un programa de aseguramiento de vivienda en Manizales y menor aún en Guatemala.

En Colombia los dos municipios contratan en forma significativa con consultoría privada, gremios profesionales y universidades, temas como capacitación y análisis y mitigación de riesgos. Con posterioridad al terremoto de 1999, el Gobierno nacional contrató con ONG la reconstrucción del área afectada. Las ONG en los municipios colombianos tienen baja participación en el tema, mayor en Guatemala después de los desastres y en Filipinas está más institucionalizada su participación.

9 Conclusiones sobre los sistemas nacionales descentralizados

9.1 Aspectos de Política

La investigación muestra que en aquellos países descentralizados y con una amplia política nacional de reducción de riesgos, las administraciones locales asumen una más alta responsabilidad en el tema, para iniciar así procesos más autónomos y eficaces de manejo integral de riesgos, con mayor participación de distintos actores de la sociedad

Pero en varios países latinoamericanos la descentralización va a tomar un período más largo y se puede esperar que en estos la desconcentración de funciones de las entidades nacionales se produzca en un plazo menor.

Igualmente debe destacarse que los gobiernos locales y entidades sectoriales que más avance muestran, son aquellos que han realizado esfuerzos para integrar esta temática con los objetivos de desarrollo, en aspectos de ordenamiento territorial, ambientales y de reducción de la pobreza; en esta dirección se está progresando en varios países del continente.

De otro lado, los países con concepción de sistema nacional descentralizado enseñan que el manejo local de riesgos progresa más exitosamente y con mejores posibilidades de sostenibilidad pues se crean mecanismos para una mayor integración con los diversos actores locales y nacionales y, en particular, con los relacionados con la planificación del desarrollo. No puede desconocerse que problemas de gobernabilidad y de intereses económicos que puedan sentirse afectados por el manejo integral de riesgos, deben ser tenidos en cuenta cuando se trate de establecer políticas, estrategias y planes de reducción de estos.

9.2 Aspectos legales

El manejo local de riesgos tiene más eficacia cuando las administraciones cuentan con una base legal amplia para este fin. En tal sentido son fundamentales las leyes que propician la autoresponsabilización de todos los actores, la descentralización de responsabilidades en el nivel local, la distribución de responsabilidades entre todos los niveles y sectores y la responsabilización de quienes generen riesgos, además, leyes regulatorias del ordenamiento territorial, del manejo ambiental y de las construcciones y normas que establezcan las bases organizativas, tales como las de los sistemas nacionales

Dentro de este marco legal, es necesario que los Comités de Emergencia cumplan ante todo funciones de asesorar y promover la definición de políticas y la coordinación interinstitucional. Pero para evitar que las responsabilidades se diluyan, la función de ejecución de actividades debe asignarse a las entidades ejecutivas de los gobiernos locales, no a los comités, ya que estos son órganos deliberantes de concertación, con carácter multiinstitucional

En cada país hay muchas normas dispersas, directa o indirectamente vinculadas con el tema de los riesgos, que deben ser mejor aprovechadas para fortalecer la acción local, así como para el desarrollo de los sistemas nacionales.

9.3 Aspectos institucionales

Los sistemas nacionales descentralizados han fortalecido la autoresponsabilidad, las facultades y el poder de los gobiernos municipales, al establecer responsabilidades permanentes para todos los actores y al crear mecanismos de integración y coordinación con el resto del Estado y de la sociedad. Además, para dar continuidad y sostenibilidad al manejo de riesgos, los países con sistemas nacionales tienen a crear oficinas permanentes de administración de riesgos, tanto a nivel local como nacional. En cuanto a

las divergencias sobre la entidad líder de los sistemas, la tendencia es hacia oficinas nacionales con la finalidad principal de coordinar, tanto las entidades de respuesta como las sectoriales del desarrollo. Pero existen alternativas para que los desacuerdos no obstaculicen el avance en la creación de los sistemas.

9.4 Aspectos sociales

En todos los países se acepta la necesidad de involucrar en el manejo local de riesgos a los diferentes actores de la sociedad. Pero en América Latina esta participación es aún muy débil, aunque tiende a crecer. No se ha afianzado el concepto preventivo en la cultura institucional y ciudadana en el continente, aunque algunos de los casos analizados indican que es posible avanzar en ese sentido.

Tal como se describió en los estudios de caso, se encontraron algunos ejemplos de delegación contractual de funciones temporales del Estado con ONG, firmas consultoras privadas, organizaciones profesionales, universidades y aseguradoras en temas como análisis de riesgos, capacitación, divulgación, reconstrucción y transferencia de riesgos, práctica que podría ser mejor aprovechada

9.5 Aspectos financieros

Aceptando la limitación de recursos en todos nuestros países y los diferentes niveles de transferencia de recursos de la Nación a las localidades, un importante logro de los sistemas nacionales radica en que ha sido posible que las diversas entidades públicas locales hayan comenzado a actuar con los recursos a su disposición en actividades de prevención, mitigación, preparativos y respuesta; esto les da una mayor garantía de sostenibilidad que cuando la responsabilidad está sólo en el nivel nacional. A ello debe adicionarse que, al existir también responsabilidades de las entidades nacionales, el apoyo subsidiario que estas empiezan a suministrar a las localidades, adquiere alta relevancia en los sistemas nacionales.

La cooperación de ONG y organizaciones internacionales en el tema constituye un apoyo relevante para muchos países latinoamericanos pero, debido a que buena parte de esta cooperación surge en forma coyuntural después de los desastres y porque en general es de muy corta duración, se pierde eficacia y sostenibilidad en los programas que se realizan. Este aspecto debe ser tenido en cuenta por las organizaciones internacionales de cooperación.

La posibilidad de que los gobiernos definan los riesgos a asumir en cada nivel del Estado y que establezcan estrategias de transferencia de riesgos, haría más viable el manejo local de riesgos.

La baja disponibilidad de recursos financieros a nivel local aparece como una constante en la justificación que suele expresarse para no actuar en la reducción de riesgos. Es indispensable promover entre todos los actores locales y nacionales, la noción de que numerosas medidas de carácter no estructural, es decir, distintas a obras de mitigación, conducentes a la introducción del concepto preventivo en los procesos de toma de decisiones sobre actividades e inversiones para el desarrollo, resultan eficaces para la reducción de riesgos y generalmente no son costosas.

9.6 Análisis global

Los anteriores análisis nos indican que la creación de sistemas nacionales, como los creados en Colombia, Nicaragua y Bolivia, con preponderancia en lo local es viable en el corto plazo en países ya descentralizados o en proceso de descentralización y, a mayor plazo, en aquellos que no se encuentran en tal situación. En los dos últimos es factible, en el corto plazo, pensar en sistemas nacionales parcialmente descentralizados o desconcentrados, mientras se avanza a mediano o largo plazo en procesos más profundos de descentralización. Pero, entre menor sea el grado de facultades, de poder y de disponibilidad de recursos a nivel local, menor será el grado de eficacia en la reducción de riesgos.

10 Recomendaciones

- 1 Se recomienda, como se sintetiza en el Anexo No.2, promover en los países latinoamericanos y del Caribe el fortalecimiento o la creación formal, según el caso, de sistemas nacionales gubernamentales para el manejo integral de los riesgos, en los cuales los gobiernos locales y las comunidades sean los actores centrales para la identificación, mitigación y transferencia de riesgos, así como para la preparación y respuesta a emergencias y para la rehabilitación y reconstrucción postdesastre.
2. Para ello, se requieren estrategias diferenciadas entre los países con descentralización política, administrativa y financiera, aquellos que tienden a la descentralización y los que conservan una administración centralizada, pueden tender a procesos de desconcentración. En cada uno de ellos son convenientes los sistemas nacionales, que en unos casos serán descentralizados y en otros, centralizados o desconcentrados. La gran diferencia entre ellos serán las atribuciones y funciones que se asignen en cada caso al nivel local y, por tanto, habrá diferencias en cuanto al poder y los recursos a disposición de las autoridades municipales.

3. En todos los casos la estrategia debe ir ligada a la evaluación de los riesgos, para integrar las políticas enfocadas hacia su reducción con las políticas de desarrollo, protección ambiental, combate a la pobreza, diversificación productiva y, en general, en los programas de inversión pública, muchos de los cuales, en forma indirecta, no visible, contribuyen a la reducción de riesgos.
4. En todos los países se requiere un esfuerzo para crear un amplio marco jurídico que propenda por incrementar las facultades legales, el poder decisorio, las responsabilidades y la disponibilidad de recursos de todo orden en el nivel local, pero que a la vez genere responsabilidades específicas para las demás instancias del Estado.
5. En todos los casos, mientras se logra disponer de un marco jurídico integral, lo cual implica por lo regular un proceso prolongado, es indispensable aprovechar al máximo la numerosa legislación vigente en cada país en campos relacionados directa o indirectamente con el tema de los riesgos, para que, como parte de un sistema nacional o por iniciativa individual, los municipios desarrollen, con concepto preventivo, actividades de planificación del desarrollo, de ordenamiento y uso del territorio y de control ambiental, urbanístico y constructivo; no obstante, cada caso estará limitado por las competencias, facultades normativas y recursos a disposición de las autoridades locales.
6. La estrategia debe igualmente contemplar el fortalecimiento institucional local para la prevención, mitigación, preparativos, respuesta y reconstrucción. Pero también debe considerarse que, para un efectivo apoyo subsidiario a las localidades desde los niveles nacional y subnacionales, estos últimos deben igualmente ser fortalecidos en sus capacidades científicas, técnicas y normativas y en sus mecanismos e instrumentos para transferirlas al nivel local.
7. Los sistemas nacionales no deben constituirse en aparatos paralelos al Estado, sino ser considerados parte integral de los procesos de modernización de los mismos. Para tal fin, se deben aprovechar al máximo las estructuras existentes, institucionalizando en ellas las políticas de reducción de riesgos y creando o especializando oficinas nacionales y locales del alto nivel técnico para la administración de riesgos, la finalidad de estas será generar actividades permanentes de apoyo a los gobiernos, promover políticas y programas en el tema, optimizar la coordinación e integración interinstitucional con actores clave locales y nacionales, entre ellos, los responsables de la planificación, las finanzas y el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad política, institucional y financiera del sistema en todos sus niveles.
8. En todas las localidades, pero en particular en aquellos países altamente centralizados que no tienen sistemas nacionales formales, es conveniente que los gobiernos locales suscriban acuerdos permanentes, o por lo menos de mediano plazo, con las instancias departamentales, regionales y

nacionales, con el propósito de fortalecer con ellos la integración, coordinación y apoyo técnico a estas.

9. En todos los casos, debe otorgarse especial importancia a fortalecer el papel de los gobiernos locales en la integración y coordinación de los demás actores organizados de la sociedad, como gremios profesionales y empresariales, organizaciones sociales, universidades, centros de investigación y ONG, para facilitar su participación, acompañamiento y asesoría permanentes a las localidades, para lo cual también sería conveniente suscribir acuerdos similares a los ya anotados, con los principales de ellos.

10. Debe promoverse el mayor aprovechamiento de la contratación de funciones temporales de los gobiernos locales con organizaciones privadas, en lo que se refiere a estudios de riesgos, capacitación, campañas de concientización y, en lo posible, durante la reconstrucción, así como desarrollar estrategias de transferencia de riesgos al sector asegurador.

11. Los mayores esfuerzos financieros de las localidades, así como de los gobiernos nacionales, están dirigidos a atender las demandas de mitigación de riesgos críticos y de reconstrucción postdeastre. Es indispensable otorgar mayor prioridad a la adopción de medidas no estructurales que demandan menos recursos y apuntan a evitar la generación de nuevos riesgos.

12. En relación con ello, es necesario prestar un apoyo amplio a los gobiernos locales y en particular a los de los municipios pequeños, para que el análisis de riesgos sea un elemento clave en los procesos de toma de decisiones sobre inversión pública y privada. Para ello es conveniente promover la generación y/o difusión de instrumentos metodológicos, entre otros para: la identificación, evaluación y zonificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos y para la medición de su impacto en el desarrollo territorial.; igualmente, para la introducción de dicho conocimiento en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como en los estudios de impacto ambiental, de prevención, de inversión y de diseño y en los procesos de construcción y operación de proyectos.

13. Se debe igualmente apoyar a las administraciones locales para incrementar su capacidad de gestión y de aprovechamiento de los recursos tanto de las diferentes entidades del Estado, como de organizaciones internacionales y académicas, asociaciones profesionales, gremios privados, organizaciones sociales, firmas de consultoría, ONG y aseguradoras para la transferencia de riesgos, sobre el cual se encontró una gran variedad de experiencias en los países estudiados.

14. El control social y el de los entes de control del Estado son mecanismos que pueden contribuir de manera notoria a la sostenibilidad de los sistemas y ello debe promoverse en todos los casos en el corto plazo.

15. Se requiere establecer sistemas de seguimiento y evaluación permanentes que permitan tanto la medición de la evolución de los riesgos como la medición del impacto de las actividades de prevención, mitigación y preparativos que se desarrollan en cada localidad.
16. Estrategias de transferencia del riesgo, que involucren a los sectores público y privado, así como la definición de las responsabilidades locales, nacionales y privadas frente a los riesgos, son una necesidad inaplazable
17. Finalmente, existe una gran necesidad de emprender programas permanentes que generen cultura y conciencia sobre la importancia de los riesgos y de sus repercusiones sobre el desarrollo, que abarquen tanto al sector institucional como al ciudadano y, en particular, dirigidos a la dirigencia pública y privada, local y nacional y a los parlamentos, orientadas a que asuman sus responsabilidades frente a los riesgos que puedan generar y a la prevención, mitigación y atención de las consecuencias que puedan producirse